**PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA: 38/2003.**

SERVIDOR PÚBLICO:

México, Distrito Federal a cuatro de enero de dos mil seis.

Vistos para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **38/2003**, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante oficio CA/DAA/126/2003 de veintisiete de octubre de dos mil tres, el Coordinador de Auditoría de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento de la Coordinadora de Responsabilidades de la citada Contraloría, el resultado de la comprobación de títulos y cédulas que se llevó a cabo en cumplimiento al punto de acuerdo del Comité de Gobierno y Administración de su sesión del dieciséis de junio de ese mismo año, del que se desprende la presunta infracción en que incurrió el servidor público ***** a lo dispuesto en

los artículos 8, fracciones I, VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 131, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo que se establece en los diversos 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento, al presentar un título profesional apócrifo ante la entonces Dirección General de Recursos Humanos de este Alto Tribunal, ostentándose como profesionista sin que exista documento fehaciente que lo avale como tal.

SEGUNDO. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil cuatro, el entonces Contralor de este Alto Tribunal tuvo por recibido el oficio de veintisiete de octubre de dos mil tres, emitido por la Coordinación de Auditoría de la entonces Contraloría así como los documentos acompañados al mismo. Además, en dicho acuerdo inicial se determinó:

“...Dado que el servidor público referido ocupaba, al momento de realizarse la investigación, el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala Administrativa y de Trabajo de este Alto Tribunal,

*desde el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, fue incluido en la lista de personas de las que se solicitó información académica. Por ello, al recibir el oficio DAEP 4173/03, emitido por la Dirección General de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, mediante el que se informó a esta Contraloría que no se tenía ningún antecedente de que ***** estuviera facultado para ejercer como abogado, se solicitó a la Subdirección de Certificación y Control Documental de la Dirección General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México información sobre la autenticidad del título profesional de licenciado en derecho expedido el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos a nombre de ***** , organismo que, mediante oficio DGAE/SCyCD/803/03, comunicó a esta Contraloría que el servidor público en comento ingresó a la carrera de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho en mil novecientos setenta y ocho, cubriendo únicamente el 39.47% (treinta y nueve punto cuarenta y siete por ciento) de los créditos del plan de estudios, sin que existiera antecedente de la presentación del examen profesional y menos aún de la expedición del título correspondiente.*

*Ahora bien, por cuanto hace a la probable responsabilidad administrativa que se deriva de la conducta de *****, ha de mencionarse que la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, da la pauta a esta autoridad para tomar en consideración los hechos que puedan entenderse como infracción a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.*

En este orden de ideas, se deduce que probablemente existe una infracción administrativa al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece los requisitos legales para ocupar el cargo de secretario de estudio y cuenta, entre los cuales se encuentra el de ser licenciado en derecho, esto es, tener título y cédula profesionales legalmente expedidos, sin que de los documentos que se agregan a los autos se tenga constancia fehaciente de que los presentados a esta Institución por el servidor en comento lo sean, encontrándose así en el supuesto que prevé el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consistente en el abuso o ejercicio indebido de un cargo, empleo o comisión, que en este caso es el

de secretario de estudio y cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, también es probable responsable de incumplir con las obligaciones previstas en las fracciones VIII y XXIV del artículo 8 de la citada Ley de Responsabilidades, ya que no se abstuvo de ejercer las funciones del cargo que desempeñaba, ni de realizar actos aun cuando había una causa legal que se lo impedía, o se contravenían disposiciones jurídicas diversas. Luego, con las conductas descritas, se le considera probable responsable de la infracción prevista en la fracción VIII del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que al actuar así, dejó de preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la administración de justicia.

*Aunado a lo anterior, existe una probable infracción a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 131 en cita, ya que al referirse a las demás infracciones que contemplan las leyes, permite presumir que ***** incumplió con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativa al Ejercicio de Profesiones en el Distrito Federal, la cual, en su artículo 2, reformado mediante el segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro, establece*

que existen campos de acción relacionados con ramas o especialidades profesionales, como es la de licenciado en derecho, que deben regularse por las leyes respectivas; por ende, al deducirse de las constancias de autos que el servidor público citado no cuenta con título y cédula profesionales de los cuales exista antecedente oficial, infringe probablemente, lo previsto por el numeral 25, fracciones II y III de ese ordenamiento reglamentario, y si es así, al ostentarse públicamente como licenciado en derecho sin tener sustento para ello, contraviene el artículo 29 de la ley reglamentaria en comento; además, al realizar actos propios de esa profesión sin documentos fehacientes que lo avalen para ello, está en el supuesto del artículo 62 de la mencionada Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional.

En consecuencia de lo expuesto y al considerarse que existen elementos suficientes para determinar que el servidor público en cuestión es probable responsable de las infracciones administrativas citadas, con fundamento en lo estipulado en los puntos de acuerdo PRIMERO y TERCERO, fracción XIV del Acuerdo General de Administración II/2003, modificado por el punto de acuerdo ÚNICO del Acuerdo General de Administración XI/2003, esta Contraloría de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para recibir y formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos que integran este Alto Tribunal, así como para acordar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario; además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 100, último párrafo, 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 14, fracciones VII y XXI, 131, fracciones VIII, XI y XII, 132, 133, 134, 135, 136 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3º, fracción II, 11 y NOVENO transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determina dar inicio al procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de **, registrado con el número 38/2003 en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría de este Alto Tribunal.***

Asimismo, se autoriza a ** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , para que practiquen las diligencias propias de la substanciación de este procedimiento.***

Con fundamento en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requiérase al servidor público ** para que en el término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, formule un informe escrito sobre todos y cada uno de los hechos que se le imputan, ya sea que los niegue, afirme, exprese los que ignore por no ser propios, o bien, los refiera como cree que tuvieron lugar y ofrezca las pruebas que en su defensa tuviera; sin omitir hacer de su conocimiento que los hechos sobre los que no suscite, se presumirán confesados sin admitir prueba en contrario.”***

TERCERO. Mediante escrito presentado en la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de febrero de dos mil cuatro, ***** rindió el informe que se le requirió sobre los hechos que se le imputaron y ofreció como pruebas de su parte la documental consistente en todo lo actuado dentro de la causa penal número 141/2003, del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; además, en dicho curso mencionó que en la especie se actualizaba una causa de impedimento.

CUARTO. En proveído de diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido en tiempo y forma el informe rendido por *****; tuvo al servidor público promoviendo incidente innominado recusándolo y señaló las once horas del primero de marzo de dos mil cuatro, a efecto de llevar a cabo la audiencia incidental correspondiente, a través de la cual se resolvería el incidente planteado; por otra parte, ordenó se notificara personalmente este acuerdo al servidor público con el objeto de que si así lo deseaba, compareciera a ofrecer pruebas relativas al incidente y alegara lo que a su derecho conviniera.

QUINTO. El primero de marzo de dos mil cuatro tuvo lugar la audiencia incidental a la cual compareció el servidor público asistido de su representante legal, y debidamente identificado manifestó: “que en virtud del incidente de recusación que promueve, ratifica su escrito de fecha diecisiete de febrero del año en curso y ofrece como pruebas la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones.”

En la misma audiencia, el Contralor tuvo por ofrecidas las pruebas mencionadas en el párrafo anterior, dada su propia y especial naturaleza, las cuales serían valoradas y

tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno y con fundamento en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se tuvo por celebrada la audiencia de pruebas y se señalaron las once horas del día tres de marzo de dos mil cuatro para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos en la que el servidor público podría manifestar lo que a su derecho conviniera en el citado incidente.

Posteriormente, el tres de marzo de dos mil cuatro, se llevó a cabo la audiencia de alegatos en la que se tuvo al servidor público ***** ratificando su escrito de alegatos presentado el dos de ese mes y año, se tuvieron por formuladas las manifestaciones de mérito las cuales fueron valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; en cuanto al anexo consistente en la copia certificada de todo lo actuado en la causa penal 141/2003, se ordenó que, dada su voluminosidad, se llevara por separado considerando que el mismo no podía ser tomado en cuenta en el incidente ya que no fue presentado con oportunidad y , por último, se tuvo por celebrada la audiencia y el diez de marzo de dos mil cuatro, el entonces Contralor de este Alto tribunal emitió resolución interlocutoria en el incidente de recusación planteado por ***** , con el siguiente resolutivo: “**UNICO.** Es infundado

el incidente innominado hecho valer por ***** contra el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en el último considerando de esta resolución”.

SEXTO. Mediante diverso proveído del veintitrés de marzo de dos mil cuatro, el entonces Contralor de este Alto Tribunal ordenó girar oficio a la entonces Dirección General de Desarrollo Humano, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, remitiera constancia desglosada de todas y cada una de las percepciones que por cualquier concepto obtuvo el servidor público investigado, durante el tiempo de su encargo en este Alto Tribunal, así como la suma total.

El veintiséis de marzo de dos mil cuatro, el entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por desahogado el referido requerimiento y mediante oficio DGRH-DN-03-200-2004 de veinticinco de marzo de dos mil cuatro de la Directora General de Desarrollo Humano, se enviaron las documentales consistentes en las constancias de percepciones y retenciones de ***** , correspondientes al período que corre de la segunda quincena de noviembre de mil novecientos noventa y nueve a la segunda quincena de diciembre de dos mil, así como el

importe de la suma total de *****; sin embargo, no anexó las constancias de las percepciones y cantidades que el servidor público recibió de la primera quincena de enero de dos mil uno a la segunda quincena de septiembre de dos mil tres, fecha en que terminó su encargo como secretario de estudio y cuenta de este Alto Tribunal, por lo que con fundamento en los artículos 80 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se giró nuevamente oficio a la citada funcionaria para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de ese proveído remitiera el desglose de las percepciones y cantidades que el servidor público obtuvo en el período faltante, a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa.

Más adelante, por acuerdo de dos de abril de dos mil cuatro, el entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por desahogado en tiempo y forma el requerimiento señalado en el párrafo que antecede mediante oficio DGRH-DN-04-211-2004, de primero de abril de dos mil cuatro, de la entonces Directora General de Desarrollo Humano, al cual anexa documentales consistentes en las constancias de percepciones y retenciones de *****, correspondientes al periodo que va de la primera quincena de enero de dos mil uno al treinta

de septiembre de dos mil tres, además los pagos que se le hicieron posteriormente, relativos al estímulo de la primera quincena de noviembre de ese año y al aguinaldo pagado en diciembre de dos mil tres y enero de dos mil cuatro; incluso, se solicitó a la citada funcionaria informara el número de cuenta de seguro de separación individualizada de *****, el monto de las aportaciones realizadas por este Alto Tribunal a la citada cuenta y la suma total de la citada cuenta y, en su caso, copia fotostática certificada del documento comprobatorio de dicha información, contando con tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este acuerdo.

SÉPTIMO. Por proveído de catorce de abril de dos mil cuatro, el entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la información solicitada la que ordenó glosar a los autos para los efectos legales conducentes; asimismo, precisó que al ostentarse el servidor público como licenciado en derecho con total conocimiento de que carecía de la documentación legal y oficial que lo avalara como tal, éste obtuvo diversos nombramientos para ejercer, entre otros cargos, el de Secretario de Estudio y Cuenta del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve al treinta de septiembre de dos mil tres y obtuvo los salarios y demás bonificaciones

que dicho cargo tiene aparejadas, por lo que se presume que obtuvo como beneficio percepciones económicas que no le correspondían por no reunir los requisitos legales para ello, percepciones que ascienden a la cantidad total de ***** , según las constancias remitidas por la entonces Dirección General de Desarrollo Humano; en ese tenor, señaló la Contraloría que al obtener el servidor público un beneficio indebido, ésta se encuentra facultada para embargar precautoriamente los bienes de aquél con el fin de garantizar el cobro de la sanción económica que, de imponerse, se convertiría en definitivo; de ahí que ante la conducta de ***** consideró procedente que se dicte como medida cautelar el embargo precautorio de la cuenta de seguro de separación individualizada número ***** de la compañía de seguros AHISA, Aseguradora Hidalgo, sociedad anónima de capital variable, actualmente Metlife México, a nombre de ***** . Sin embargo, con el fin de no exceder las atribuciones conferidas a la Contraloría en los Acuerdos Generales de Administración II/2003 y XI/2003 y evitar cuestionamientos posteriores que pudieran dejar sin defensa a ***** , ordenó remitir los autos a la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal para que por su conducto se sometiera a consideración de la autoridad competente si procede dictar el embargo precautorio de la cuenta de seguros referida.

OCTAVO. Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil cuatro y con fundamento en el punto de acuerdo ÚNICO del Acuerdo General de Administración XI/2003, el Contralor de este Alto Tribunal remitió a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (antes Dirección General de Asuntos Jurídicos) el expediente de responsabilidad administrativa **38/2003**, la que el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro emitió opinión relativa a la propuesta de practicar embargo precautorio de la cuenta de seguro de separación individualizada ***** de la cual es titular *****; dicha opinión se emitió con visto bueno del señor Ministro Presidente de este Alto Tribunal, en cuyo contenido se arribó a las conclusiones siguientes:

“1. Se estima que la Contraloría de este Alto Tribunal se encuentra facultada para dictar las medidas necesarias para garantizar el pago de la posible sanción económica que pudiera llegar a imponerse a ** sin necesidad de someter al conocimiento de la autoridad competente para sancionar al servidor público de que se trata, la procedencia de dicha medida cautelar.*”**

2. Se considera que existe justificación legal para llevar a cabo el embargo precautorio de la cuenta de seguro de separación individualizada **.***

NOVENO. Por acuerdo de dos de junio de dos mil cuatro el entonces Contralor de este Alto Tribunal, tuvo por recibidos los autos del expediente en que se actúa así como la copia certificada de la opinión de veinticuatro de mayo del mismo año emitida por la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos, relativa a la medida cautelar propuesta y con lo anterior ordenó se procediera al análisis de los autos a fin de determinar si debía decretarse el embargo precautorio de la cuenta de separación individualizada del servidor público, con objeto de garantizar el cobro de la probable sanción económica que se le impusiera al resolverse el procedimiento.

DÉCIMO. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil cuatro el entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en las constancias que obran en autos y con fundamento en lo dispuesto en el punto tercero, fracción XIV, del Acuerdo General de Administración II/2003 del tres de marzo de dos mil tres, modificado por el diverso XI/2003 de dieciocho de agosto de dos mil tres, en los artículos 3º, fracción II, 11 y 16,

segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, decretó el embargo precautorio de la cuenta de seguro de separación individualizada ***** de Seguros *****, a nombre de *****, asimismo giró oficio a *****, acompañando copia certificada de la resolución respectiva, a fin de que retuviera el monto de la cuenta del seguro de separación individualizada del servidor público y para que en el término de tres días informara sobre el cumplimiento a lo ordenado.

DÉCIMO PRIMERO. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil cuatro, la entonces Contraloría de este Alto Tribunal tuvo por recibido el oficio número SDJC-MVCL-3777-2004 de veintidós de junio de dos mil cuatro de *****, mediante el cual informó que aunque no localizó trámite alguno con motivo de la separación del cargo de *****, ha procedido a colocar un candado a efecto de evitar el pago del seguro de separación individualizada del referido exservidor público, hasta en tanto se resolviera lo conducente en el presente procedimiento.

Por auto de cinco de noviembre de dos mil cuatro y a fin de emitir el dictamen correspondiente, se ordenó girar oficio a la Dirección General de Desarrollo Humano de este

Alto Tribunal, para que en el plazo de tres días hábiles remitiera el expediente personal de *****, o bien, copia fotostática debidamente certificada del mismo.

DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil cuatro, se tuvo a la entonces Directora General de Desarrollo Humano de este Alto Tribunal dando cumplimiento al proveído anterior y remitiendo dos tomos del expediente ***** de *****, asimismo, ordenó certificar un tanto del expediente aludido para glosarlo en un cuaderno anexo y devolver el original a la citada Dirección General.

DÉCIMO TERCERO. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil cinco y a fin de que se estuviera en posibilidad de emitir el dictamen correspondiente, se ordenó girar oficio a la Dirección de Registro Patrimonial, para que en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, remitiera copia fotostática certificada de la declaración de conclusión de encargo presentada por el ex servidor público.

DÉCIMO CUARTO. El trece de abril de dos mil cinco, la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto

Tribunal emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO.- ** es responsable de las infracciones administrativas que se le atribuyen, conforme lo expuesto en el sexto considerando de este dictamen.***

SEGUNDO.- Se propone sancionar a **, con inhabilitación temporal por el término de quince años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de conformidad con lo expuesto en el considerando séptimo de este dictamen.***

TERCERO.- Se propone levantar el embargo precautorio decretado mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil cuatro, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de este dictamen.”

Las consideraciones en que se sustenta el dictamen, en síntesis, son las siguientes:

I. La infracción atribuida a ***** consiste en haberse ostentado como profesionista ante este Alto Tribunal desde el momento en que ingresó a laborar en él (dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve), presentando un título y cédula profesionales falsos que lo acreditaban como licenciado en derecho y ocupar el

cargo de secretario de estudio y cuenta, sin cumplir los requisitos especiales para ello.

II. ***** es responsable administrativamente de la conducta que se le atribuye por las razones siguientes:

1) Al momento en que la Coordinación de Auditoría llevó a cabo la verificación de títulos y de cédulas profesionales, ***** tenía el carácter de servidor público ya que ocupaba el cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, Ponencia del señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano; dicho cargo se encontraba dentro del listado de servidores públicos que se ubicaban en los niveles sujetos a revisión por parte de la mencionada Coordinación de Auditoría.

2) De la copia certificada del oficio DAEP 4173/03 folio 8616 del dieciocho de septiembre de dos mil tres, de la Dirección de Profesiones de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica se desprende que no se contaba con ningún antecedente de que ***** estuviera facultado para ejercer como licenciado en derecho; por tanto, a fin de corroborar la autenticidad del título expedido el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos a nombre del mencionado servidor público por la

Universidad Nacional Autónoma de México, la entonces Contraloría solicitó a la Subdirección de Certificación y Control Documental de la citada institución académica, información al respecto.

3) La mencionada Subdirección informó que ***** ingresó a la carrera de licenciado en derecho en la Facultad de Derecho de esa Universidad en mil novecientos setenta y ocho, cubriendo únicamente el 39.47% de los créditos del plan de estudios sin que exista antecedente de la presentación del examen profesional y, menos aún, la expedición del título correspondiente.

4) De la documentación presentada por ***** para ingresar al Poder Judicial de la Federación e integrar su expediente personal en la entonces Dirección General de Recursos Humanos de este Alto Tribunal, se advierte que existen copias del título y cédula profesionales que fueron certificadas, la primera de ellas por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito el catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis y la segunda, por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, de ahí que dichos documentos

sirvieron de base para acreditar que cumplía con el requisito de ser licenciado en derecho y ser nombrado secretario de estudio y cuenta.

5) En el expediente personal que se lleva en la entonces Dirección General de Recursos Humanos, existen diversos escritos signados por ***** en los que anteponen las siglas "Lic.", inclusive en su renuncia al cargo de secretario de estudio y cuenta adscrito a la ponencia del señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, de treinta de septiembre de dos mil tres.

6) Del análisis de los autos se desprende que ***** se ostentó como licenciado en derecho a sabiendas de que no contaba con título y cédula profesionales necesarios para desempeñarse como secretario de estudio y cuenta, por lo que con su proceder faltó a los principios de dignidad y profesionalismo propios de la función judicial, pues al hacer uso con pleno conocimiento de documentación apócrifa para ostentarse como licenciado en derecho sin serlo, violó lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incurriendo en las infracciones previstas en el artículo 131, fracciones VIII y XI, de la citada Ley Orgánica debido al incumplimiento de las obligaciones contenidas en

el artículo 8, fracciones I, VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al no abstenerse de desempeñar dicho cargo y ejercer la funciones propias del mismo, más aún, presentó para integrar su expediente título y cédula profesionales falsos, logrando así la obtención del mencionado nombramiento y con ello el ejercicio indebido del cargo de secretario de estudio y cuenta para el que no reunía lo requisitos legalmente establecidos para su ejercicio; asimismo viola las disposiciones contenidas en los artículos 2, modificado por el segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro, 25, fracciones II y III, 29 y 62 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativa al Ejercicio de Profesiones en el Distrito Federal.

7) ***** observó una conducta ajena a un recto proceder, actualizándose con esto las infracciones previstas en los artículos 131, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracciones I, VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los artículos 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal

y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento.

En el dictamen se estableció que las defensas esgrimidas por ***** no fueron suficientes para demostrar que no incurrió en la infracción que se le atribuye.

Así, al haber encontrado responsable administrativamente a ***** de la conducta consistente en ostentarse como licenciado en derecho sin serlo y haber presentado un título y cédula profesionales falsas para acreditar ese grado académico, en el dictamen se propone sancionarlo con inhabilitación temporal por el término de quince años, pues aun cuando las infracciones cometidas no están catalogadas como graves, el hecho de haberse ostentado por casi veintidós años como licenciado en derecho sin serlo, sorprendiendo al Poder Judicial de la Federación y, específicamente, a este Alto Tribunal por tres años diez meses en que ocupó el cargo de secretario de estudio y cuenta, es por sí misma reprochable y grave al haber faltado a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, lealtad, honradez e imparcialidad, por lo que debe sancionársele rigurosamente para evitar la repetición

de tales conductas y prevenir que por un tiempo considerable ocupe un cargo público cuyo requisito sea tener cédula y título profesional de licenciado en derecho.

DÉCIMO QUINTO. El referido dictamen se notificó personalmente a *****, el dieciocho de abril de dos mil cinco; en la misma fecha, el Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal acordó remitir a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (antes Dirección General de Asuntos Jurídicos) el expediente de responsabilidad administrativa **38/2003**. El mencionado servidor público se abstuvo de ejercer el derecho que le confiere el artículo tercero, fracción XIV, del Acuerdo General de Administración II/2003.

DÉCIMO SEXTO. Transcurrido el término anterior sin que el servidor público ejerciera sus defensas, la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal emitió opinión el tres de enero de dos mil seis en el sentido de que ***** es responsable administrativamente de la falta materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y

resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra de ***** , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el caso se siguió el procedimiento por las faltas administrativas previstas en las fracciones I, VIII y XXIV del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales conforme al contexto normativo vigente en la fecha en que se inició este procedimiento administrativo no están legalmente calificadas como graves.

Al respecto, cabe mencionar que el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que, en todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Asimismo, el artículo Noveno Transitorio de la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé que las menciones que en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas o administrativas de carácter federal se hagan de la Ley

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o en particular de alguno de sus preceptos, se entenderán referidas a la nueva Ley o a los artículos de este ordenamiento legal cuyo contenido coincida con los de la Ley que se deroga.

Ante ello, cabe mencionar que la fracción VIII del artículo 8 de la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no coincide con ninguna de las establecidas como graves en el diverso 47 de la anterior legislación, dado que la actual fracción VIII del artículo 8 y la anterior fracción XI del numeral 47 son distintas pues esta última prevé como falta administrativa “desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba” en tanto que la actual fracción VIII señala “ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida”, por lo que tal como lo consideró la Contraloría para determinar el procedimiento que debía seguirse, debe estimarse que el mismo no se refiere a ninguna de las faltas que legalmente están catalogadas como graves ya que el mismo no se tramita por ninguna de las faltas a las que remite el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación únicas

que conforme a este ordenamiento se clasifican por ministerio de ley como graves y, por ende, no se actualiza el supuesto de competencia previsto en la fracción I del citado artículo 133 de la referida Ley Orgánica sino el mencionado en su fracción II.

SEGUNDO. Sentado lo anterior, cabe señalar, en principio, que el presente asunto se rige, en lo sustantivo, por lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que respecto a los aspectos procesales, debe tomarse en cuenta que el artículo tercero transitorio del Acuerdo General Plenario 9/2005 de veintiocho de marzo de dos mil cinco establece que los procedimientos administrativos que se encuentren pendientes de resolución se concluirán conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de ese acuerdo, por lo que es de concluirse que las reglas aplicables para este asunto en la parte adjetiva serán las vigentes en el momento en que se inició el mismo. Por otra parte, conviene señalar que ante la falta de regulación expresa, bien sea en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en las disposiciones de observancia general que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe aplicarse directamente lo

dispuesto en el marco legal que constituye el sistema general de responsabilidades y que se encuentra establecido en la respectiva ley federal, es decir, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que si en el artículo 47 de este ordenamiento se establece que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esa ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe concluirse que ante los vacíos legislativos que presente la regulación creada específicamente para esta Suprema Corte y la citada Ley de Responsabilidades, el ordenamiento de aplicación supletoria es precisamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TERCERO. Antes de abordar el análisis del expediente materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa 38/2003, debe señalarse que de autos se advierte que se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que: **1.** El Coordinador de Auditoría informó a la Coordinadora de Responsabilidades el resultado de la comprobación efectuada del que se desprende la posible infracción en que incurrió *****, es decir, denunció ante el órgano

competente de la Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** El Contralor de este Alto Tribunal acordó y registró el procedimiento sobre la probable infracción y, tomando en cuenta que las faltas atribuidas no encuadran en las clasificadas legalmente como graves, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que ***** rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa, para lo cual, en respeto a la garantía de audiencia, y como deriva de lo previsto en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le hizo saber las causas de responsabilidad que se le atribuyen. **3.** El Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente y lo remitió a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. **4.** Se otorgó el plazo para que ***** manifestara lo que a su derecho conviniera en términos de lo previsto en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, sin que dicho servidor público ejerciera esa prerrogativa.

CUARTO. El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada por el Coordinador de Auditoría en contra de

*****, desarrollado el procedimiento respectivo la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicho servidor público es responsable de la infracción administrativa que se le atribuyó en la denuncia antes referida. Es decir, la mencionada Contraloría consideró que el servidor público en cuestión es responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 131, fracciones VIII y XI, en relación con el artículo 9° ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el artículo 8, fracciones I, VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en los artículos 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento, al ostentarse como licenciado en Derecho sin serlo y ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta ante este Alto Tribunal y exhibir título y cédula que carecen de validez oficial.

De tal manera, para estar en aptitud legal de resolver en definitiva sobre si ***** omitió cumplir alguna de sus

obligaciones relacionadas con el servicio público, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados en la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 109, fracción III, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9º último párrafo y 131, fracciones VIII y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 8º, fracciones I, VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y, 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento son del tenor siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“ARTÍCULO 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo

este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

...III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones...”

“ARTÍCULO 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de

acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

“ARTÍCULO 9°.

... El secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los secretarios auxiliares de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los actuarios, deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año; el subsecretario y los secretarios de estudio y cuenta, así como el secretario general de acuerdos, deberán tener, además, por lo menos tres y cinco años de práctica profesional respectivamente,

preferentemente en el Poder Judicial de la Federación”.

“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

...VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores.

...XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional.

...XII. Las demás que determine la Ley.”

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

...XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.”

**Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional,
relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito
Federal**

“ARTÍCULO 2. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.”

“ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. En tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo 2° reformado, las profesiones que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio son las siguientes:

Licenciado en Derecho...”

“ARTÍCULO 25. Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones a que se refieren los Artículos 2o. y 3o., se requiere:

I. Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles.

II. Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y

III.- Obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio.”

“ARTÍCULO 29. Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece esta Ley, exceptuándose, a los gestores a que se refiere el artículo 26 de esta Ley.”

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende la obligación a cargo de los servidores públicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de actuar bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Asimismo se establece la obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento de lo previsto en una disposición legal.

Además, para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en este Alto Tribunal, es requisito indispensable ser licenciado en Derecho.

Ahora bien, en el caso de ***** se le atribuye como infracción el haberse conducido en el desempeño de sus funciones con falta de probidad u honradez ya que se ostentó como licenciado en Derecho para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta sin contar con la licenciatura respectiva, además de que presentó un título y cédula falsos de licenciado en Derecho sin haber concluido sus estudios, por lo que, en primer lugar, debe precisarse qué conducta se acredita plenamente con las constancias que obran en autos y, en segundo lugar, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadra tal conducta y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de aquélla.

En ese orden de ideas, del análisis del expediente relativo a este procedimiento de responsabilidades administrativas se advierte que en él obran copias certificadas de diversos documentos, entre los que destacan: a) oficio CA/DAA/126/2003, mediante el cual se hace del conocimiento de la Coordinadora de Responsabilidades de la Contraloría de esta Suprema Corte, el resultado de la comprobación de títulos y cédulas profesionales de algunos servidores públicos de este Alto Tribunal; b) oficio DGCI-DAA/085/2003 del Contralor de

este Alto Tribunal, dirigido al Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para solicitarle informes respecto del registro de algunos títulos profesionales y la expedición de cédulas profesionales de las personas señaladas en una relación anexa (entre ellas, ***** c) oficio DAEP 3551/03 folio 6500 del veintiuno de agosto de dos mil tres, del Director de Autorización y Registro Profesional de la mencionada Secretaría, dirigido al Contralor de este Alto Tribunal, mediante el cual, entre otras cosas, le envía relación de personas que, de entre los cuestionados, no cuentan con cédula profesional; d) oficio DGCI-DAA-113/2003 del Contralor de esta Suprema Corte, dirigido a la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitando información respecto de la autenticidad del título profesional de licenciado en Derecho expedido a *****; e) oficio DGAE/SCyCD/803/03 del Subdirector de Certificación y Control Documental de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido al Contralor de esta Suprema Corte, mediante el cual informa la trayectoria académica de ***** señalando que ingresó a la carrera de licenciado en derecho en 1978, cubriendo únicamente el 39.47% de los créditos del plan de estudios; f) copia fotostática del título profesional de licenciado en Derecho, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México a nombre de ***** el veintinueve de noviembre de mil

novecientos ochenta y dos, que obra en el expediente personal; g) denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República de quince de octubre de dos mil tres; h) tres nombramientos otorgados a favor de ***** en el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano; i) Escrito de veinticuatro de abril de dos mil en el que el referido servidor público solicita la autorización de la comisión sobre el puesto de base de secretario de tribunal para ocupar el de secretario de estudio y cuenta en este Alto Tribunal, escrito en el que firma como “licenciado”; j) Dos escritos dirigidos al titular de la entonces Dirección General de Recursos Humanos de veinte de septiembre de dos mil y treinta de septiembre de dos mil dos, en los que solicita entre otras, copias certificadas de su título y cédula profesionales, documento que firma como “licenciado”; k) informe de actividades signado por el “licenciado” ***** , dirigido al Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal; l) copia de la Cédula profesional número ***** , expedida a ***** que lo acredita como licenciado en Derecho, y supuestamente expedida el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y, m) Escrito de treinta de septiembre de dos mil tres, en el que ***** renuncia al puesto de Secretario de Estudio y Cuenta, con

efectos a partir del primero de octubre de dos mil tres, documento que signa como "licenciado".

De los señalados elementos de convicción, tomando en cuenta el valor probatorio que les corresponde en términos de lo establecido en los artículos 129, 197, 202, 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a las Leyes que regulan este procedimiento, se arriba al convencimiento de que:

- ***** ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, a partir del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y hasta el treinta de septiembre de dos mil tres, fecha en que causó baja por motivos personales que le impiden continuar prestando sus servicios en ese puesto, como deriva de la valoración de los documentos señalados en los incisos h) y m), los cuales constituyen documentos públicos y documental privada que permiten arribar a esa conclusión.
- Mientras ocupaba el puesto de Secretario de Estudio y Cuenta, ***** se condujo ante este

Alto Tribunal como licenciado en Derecho ya que ocupaba un puesto para el cual, entre otros requisitos, se exige legalmente contar con dicha licenciatura; asimismo, exhibió ante la entonces Dirección General de Recursos Humanos copia de un título profesional expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México que lo acreditaba como tal así como de una cédula profesional. Es decir, ***** se ostentó como licenciado en derecho, lo que se corrobora con los documentos que durante el ejercicio de su encargo en la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano firmó como licenciado y deriva de la valoración adminiculada de los documentos señalados en los anteriores incisos f), i), j), k) y l), documentales privadas que en su conjunto y, atendiendo a lo previsto en los artículos 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hacen prueba plena dado que el servidor público en comento no objetó la firma ni el contenido de los mismos.

- De las investigaciones realizadas por la Contraloría de este Alto Tribunal en cumplimiento de lo acordado por el Comité de Gobierno y

Administración en su sesión del dieciséis de junio de dos mil tres, se desprende que ***** ingresó a la carrera de licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de mil novecientos setenta y ocho y que cubrió únicamente el 39.47% de los créditos del plan de estudios; es decir, no culminó sus estudios de licenciatura y, mucho menos, obtuvo el grado de licenciado en derecho por la mencionada institución, lo que deriva de la valoración de los documentos públicos señalados en los incisos b), c), d) y e), lo cuales acreditan plenamente que ***** se ostentó como licenciado en Derecho sin haber concluido esos estudios y, menos aún, obtener el grado requerido para ocupar el puesto de Secretario de Estudio y Cuenta.

De tal suerte, se pone de manifiesto que dicho servidor público a sabiendas de que no contaba con el título de licenciado en Derecho, necesario para desempeñarse como Secretario de Estudio y Cuenta, se ostentó con ese carácter e incluso exhibió documentos falsos con el propósito de aparecer ante este Alto Tribunal con el mencionado nivel académico.

Con lo anterior, se acredita que ***** se ostentó como licenciado en Derecho ante este Alto Tribunal con la finalidad de ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta presentando documentación apócrifa tanto de la cédula como del título profesionales.

Precisada la conducta que realizó el referido servidor público, debe analizarse si ésta se ubica en alguno de los supuestos que prevén las fracciones I, VIII y XXIV del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y VIII del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respecto de las cuales la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el procedimiento de responsabilidad administrativa que ahora se resuelve.

Ante ello, debe señalarse que en las referidas fracciones se señalan como obligaciones de los servidores públicos:

“Artículo 8...

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto

u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;

...”

“Artículo 131.

...

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores;

...”

Por cuanto hace a la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe señalarse que ésta obliga a todo servidor público a: a) Cumplir el servicio que le sea encomendado y b) abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio o que ello implique un abuso o ejercicio indebido.

Cabe recordar que la conducta atribuida a ***** es la de ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta sin cumplir los requisitos legales para ello, situación que no encuadra en la norma señalada pues en autos no está acreditado en forma alguna que el referido servidor público haya incumplido con las actividades que le fueron encomendadas.

Incluso, debe tomarse en cuenta que la conducta que ha quedado acreditada no guarda relación alguna con los términos en los que se desempeñó el servicio encomendado, de donde se sigue que la misma no puede dar lugar a un incumplimiento del servicio encomendado ya que la falta de requisitos para ocupar el cargo y la falsedad en la que incurrió al presentar supuestos título y cédula profesionales no trasciende, por sí solo, al cumplimiento del servicio, pues para acreditar que tal conducta afectó a este

último, es necesario que se aporten elementos relativos a una defectuosa prestación del mismo, lo que en el caso no acontece.

Por otro lado, la conducta acreditada tampoco puede implicar, por sí sola, la realización de actos que causen la suspensión o deficiencia del servicio prestado ni el ejercicio indebido del cargo.

En efecto, la suspensión, deficiencia o indebido ejercicio de un cargo tiene lugar cuando el servidor público al desarrollar sus labores incurre en omisiones o excesos que implican el desapego a las normas que rigen su conducta y regulan las atribuciones del órgano que encarna.

Por ende, si la conducta motivo de este procedimiento de responsabilidad administrativa aconteció antes de ocupar el cargo, lo cierto es que por sí sola no conlleva suspensión, deficiencia o indebido ejercicio de un cargo, ya que incluso la validez de su actuación no está condicionada por el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir quien ocupe el cargo, aunado a que su función no era decisoria sino meramente auxiliar del órgano jurisdiccional al cual se encontraba adscrito. Sirve de apoyo a lo anterior,

en lo conducente, la tesis plenaria que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

“SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La noción de "incompetencia de origen" nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por

cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales

necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular.” (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII,

***Noviembre de 2005, Tesis: P. XLVIII/2005,
Página: 5).***

En ese tenor, si la conducta que se atribuye al servidor público sujeto a este procedimiento guarda relación con los requisitos para ocupar el cargo, mas no con los términos en los que ejerció las funciones propias del cargo o bien diversas que no corresponden al mismo, debe concluirse que la conducta materia de este procedimiento no encuadra en la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por otra parte, respecto de la fracción VIII del mencionado artículo 8 de la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos antes transcrita, cabe mencionar que en ésta se establece la obligación de todo servidor público de abstenerse de ejercer un empleo cuando exista alguna causa legal que se lo impida.

Esto implica que todo servidor público puede validamente ejercer sus funciones siempre y cuando no exista alguna causa prevista en la Ley que se lo impida.

Al respecto, el legislador señala expresamente dos causas legales que impiden el ejercicio de las funciones de un cargo público, como son haber concluido el período de designación o haber sido cesado, sin que ello impida desconocer, como se precisa en la citada fracción, que pueden existir otras causas legales que impidan ejercer un cargo.

Entre esas causas legales se encuentra, sin duda, el incumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador para ocupar un cargo, los cuales deben entenderse como condiciones legales que, salvo disposición legal en contrario, indefectiblemente deben cubrirse al encontrarse previstas en una ley.

En efecto, si en un acto formal y materialmente legislativo se establecen determinados requisitos que deben cumplirse para que una persona pueda ser designada en un cargo público, debe reconocerse que mediante tal disposición el legislador ordinario ha estimado necesario, para que el Estado cumpla sus fines mediante la adecuada prestación del servicio público, que se reúnan por aquélla un cúmulo de características que son reveladoras de sus aptitudes y conocimientos, las que en todo momento deben valorarse para designar a los

servidores públicos de los Poderes de la Unión, tal como lo precisa la fracción VII del apartado B del artículo 123 constitucional.

En ese orden de ideas, si el legislador establece determinados requisitos para ocupar un cargo público debe estimarse que el incumplimiento de los mismos constituye una causa legal que impide a una persona ser designada en dicho cargo.

Cabe agregar que esa causa legal que impide a una persona aceptar un cargo público, aun cuando no trasciende a la validez de los actos que en su momento llegara a desarrollar quien acepte un nombramiento a pesar de no cumplir con los requisitos legales para ello, sí implica el incumplimiento de una obligación exigible a todo servidor público que debe ser sancionada en caso de acontecer.

Dicho en otras palabras, el hecho de que la validez de las actuaciones de un órgano del Estado no se afecte por que la persona que lo encarna no reúne los requisitos para ocupar aquél, de ninguna manera permite desconocer que esa trasgresión al marco jurídico sí conlleva una responsabilidad para la persona que a sabiendas de su

situación aceptó un nombramiento sin cumplir los requisitos legales para ello.

En ese contexto, en el presente asunto debe tenerse presente que el último párrafo del artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a los requisitos para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta, señala:

“ARTÍCULO 9.

... El secretario general de acuerdos, el subsecretario general de acuerdos, los secretarios auxiliares de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta y los actuarios, deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año; el subsecretario y los secretarios de estudio y cuenta, así como el secretario general de acuerdos, deberán tener, además, por lo menos tres y cinco años de práctica profesional, respectivamente, preferentemente en el Poder Judicial de la Federación”.

Del precepto citado se desprende que la persona que ocupe el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta debe contar con título de licenciado en Derecho, de ahí que la falta de este documento constituya una causa legal que impide ocupar ese cargo.

Ante ello, resulta indiscutible que es una obligación de todo servidor público que ocupe ese cargo contar con título profesional de licenciado en Derecho, por lo que las personas que lo acepten sin contar con el referido título estarán ocupando un cargo a pesar de que existe una causa legal que se los impide.

En el caso, debe tenerse presente que ***** no cuenta con la citada licenciatura ya que de las constancias que obran en autos, específicamente de las investigaciones para corroborar la autenticidad de los documentos exhibidos por diversos servidores públicos de este Alto Tribunal realizadas por la Contraloría en cumplimiento de lo acordado por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión del dieciséis de junio de dos mil tres, se advierte que el referido servidor público ingresó a la carrera de licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de mil

novecientos setenta y ocho y que cubrió únicamente el 39.47% de los créditos del plan de estudios; es decir, no culminó sus estudios de licenciatura y, mucho menos, obtuvo el grado de licenciado en derecho por la mencionada institución ya que ésta informó que no existía referencia alguna de la presentación del examen profesional y menos aún de la expedición de la documentación que avalara tal circunstancia.

De lo anterior, se colige que ***** no contaba con la licenciatura en Derecho, necesaria para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese tenor, si la fracción VIII del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que entre las obligaciones de todo servidor público está la de abstenerse de ejercer las funciones de un empleo cuando exista causa legal que se lo impida, y ***** estaba impedido para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en atención a que el artículo 9°, párrafo último, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le exigía un requisito con el cual no contaba, debe concluirse que con su conducta omitió abstenerse de ejercer las funciones de un cargo para el

cual estaba legalmente impedido, por lo que aquél faltó a la obligación a que se refiere la fracción VIII en estudio y, con ello, incurrió en responsabilidad administrativa.

En otro orden de ideas, en relación con la obligación prevista en la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe tomarse en cuenta que la misma se actualiza cuando un servidor público incumple cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

Al respecto, ***** faltó a su deber de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal relacionada con el servicio público, pues violentó lo dispuesto en los artículos transcritos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional.

Lo anterior, en atención a que como ya se estableció, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la mencionada ley reglamentaria, para ejercer cualquiera de las profesiones a que se refiere el diverso transitorio segundo de la misma ley, entre las que se encuentra la de licenciado en derecho, se requiere contar con el título

legalmente expedido y debidamente registrado y con la patente de ejercicio respectiva de la Dirección General de Profesiones.

En el caso, quedó demostrado que *****, quien se hizo aparecer ante este Alto Tribunal como licenciado en derecho, no cuenta con título legalmente expedido, ni con la patente respectiva, ya que de las investigaciones realizadas por este Alto Tribunal derivan elementos suficientes para demostrar que el referido servidor público no había concluido sus estudios profesionales, lo que resulta violatorio de lo dispuesto en los numerales 25 y segundo transitorio señalados en el párrafo anterior, al ostentarse sin serlo como licenciado en Derecho y, además, presentar documentos apócrifos.

Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la misma ley, las personas que como el servidor público de referencia, sin tener título profesional legalmente expedido actúan habitualmente como profesionistas, incurrir en las sanciones que se establecen en esa ley, lo que revela la existencia de la obligación legal a cargo de los gobernados de abstenerse de actuar habitualmente como profesionistas sin tener título profesional, obligación que también es exigible respecto de los servidores públicos

y que al no cumplirse por éstos se traduce en una falta de abstención de una conducta irregular, lo que implica el incumplimiento de una disposición legal relacionada con el servicio público.

Cabe señalar que la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, está íntimamente relacionada con el servicio público, toda vez que corresponde a las instituciones del Estado o descentralizadas y a las instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, expedir los títulos profesionales (artículo 1 de esa ley); asimismo, corresponde a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública vigilar el ejercicio profesional (artículo 21 de la misma ley); y, de igual manera, es facultad de esta última expedir las cédulas profesionales correspondientes (artículo 23, fracción IV de la invocada ley reglamentaria).

Por ende, si un servidor público se ostenta como licenciado en Derecho presentando documentos apócrifos debe estimarse que con tal conducta tiene lugar el incumplimiento de normas relacionadas con el servicio público dado que con ello pretendió atribuir a las autoridades competentes de la Secretaría de Educación

Pública la emisión de una cédula profesional, servicio público que legalmente les corresponde.

En abono a lo anterior, también se actualiza la referida falta en virtud de que, como se precisó, la conducta de ***** fue contraria a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debiendo estimarse que al exigir este numeral a las personas que ocupen el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta contar con el título de licenciados en Derecho, prevé una disposición relacionada con el servicio público que corresponde prestar a los trabajadores que ocupen ese puesto.

En tal virtud, con su conducta, ***** faltó a su deber de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal relacionada con el servicio público, pues violentó lo dispuesto en los mencionados artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Luego, dejó de observar lo dispuesto en la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues con su

proceder incumplió disposiciones legales, como son las contenidas en los artículos 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incurriendo de esa manera en causa de responsabilidad de acuerdo con lo que se establece en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por último, respecto a la fracción VIII del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debe señalarse que también el servidor público incumplió con la obligación de preservar la dignidad y profesionalismo propios de la función judicial a que se refiere esta fracción.

Al respecto, debe señalarse que esta causa de responsabilidad se actualiza, entre otros supuestos, cuando el servidor público realiza cualquier acto que merma la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado o cuando sus acciones no reflejan la credibilidad y confianza propias de su investidura.

En ese contexto, debe destacarse que ***** se ostentó como licenciado en Derecho presentando documentación apócrifa para ello, antes de ingresar a este Alto Tribunal.

Asimismo, una vez que ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantuvo en la conducta señalada y durante el tiempo en que ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta continuó con ella.

En ese tenor, aun cuando la conducta fue previa, esto es, se realizó antes de ingresar a este Alto Tribunal, debe señalarse que al ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta, se mantuvo en él con base en documentación apócrifa y se ostentó indebidamente ante este Alto Tribunal como licenciado en Derecho.

Con lo anterior, queda acreditado que ***** no preservó con la conducta atribuida la dignidad ni el profesionalismo con que debía conducirse, pues al no cumplir con los requisitos legales establecidos para ocupar un cargo y ostentarse como licenciado en Derecho para pretender cumplirlos, no dio la seriedad debida a su función, lo que denota una falta de profesionalismo en su

actuación, ya que con ésta mermó la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado y, además, su conducta no refleja la credibilidad y confianza propias de su investidura, con lo que se demuestra que ***** faltó a la obligación de tener un comportamiento probo, recto y honrado para con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así las cosas, se considera que ***** incumplió con las obligaciones señaladas en las fracciones VIII y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como las fracciones VIII y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta sin cumplir los requisitos legales señalados para tal efecto y, además, se ostentó como licenciado en derecho, sin contar con ese grado académico y exhibió documentos falsos para acreditarse como tal, contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 9º, párrafo último, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho

ordenamiento, en los que se establece que para ejercer la actividad profesional de licenciado en Derecho se requiere poseer título legalmente expedido y debidamente registrado y obtener de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública la patente de ejercicio correspondiente; de ello se sigue que dejó de cumplir con las referidas obligaciones de los servidores públicos establecidas en las diversas fracciones antes mencionadas del mismo artículo 8.

Una vez precisadas las faltas administrativas en que incurrió *****, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta indispensable determinar si el servidor público de que se trata es responsable de las conductas que se le atribuyen.

Para ello, es necesario atender a las defensas formuladas por ***** al rendir el informe que le fuera solicitado con motivo del presente procedimiento de responsabilidad administrativa, las cuales se hicieron consistir, en síntesis, en lo siguiente:

- Es cierto que utilizó título y cédula profesionales apócrifos para aparentar que contaba con la calidad de

licenciado en derecho, sin haber realizado los estudios correspondientes.

- Ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta no obstante no reunir los requisitos legales exigidos para ello y realizó actos propios de esa profesión sin tener la documentación que lo acreditara como tal.

- Fue un error por falta de madurez por lo que ya ofreció una disculpa tanto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como a los señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con los que laboró.

- Se viola en su perjuicio el principio de non bis in idem ya que la Contraloría de este Alto Tribunal está imposibilitada jurídicamente para seguir en su contra un procedimiento administrativo por los mismos hechos a los que se contrae la causa penal que se le sigue ante el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, y en ambas vías se le impondría la misma sanción, esto es, se sancionaría dos veces la misma conducta.

A partir de lo manifestado por ***** se concluye que no existe causa alguna que justifique la falta en que incurrió pues, incluso, reconoce haber cometido la

conducta que se le imputa, sin que esgrima motivo alguno que le hubiera impedido incurrir en ella; además, respecto de la violación al principio de non bis in idem que aduce, debe señalarse que de ninguna manera se le aplicaría dos veces una misma sanción por un sola conducta ya que este procedimiento de responsabilidad se traduce en el incumplimiento de un deber en su calidad de servidor público y, además, es factible que una misma conducta configure diferentes sanciones conforme a diversos ordenamientos, atendiendo a la naturaleza de la responsabilidad, de ahí que pueda derivar en una sanción penal o administrativa, e incluso civil y política.

Así, un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones, sin que con ello se viole el principio citado por el ex servidor público. Lo anterior tiene sustento en los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se reconoce en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

***“RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES
PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO***

CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: A) La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B) La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C) La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D) La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas

aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.” (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página: 128).

Tampoco le libera de responsabilidad el hecho de que su proceder tuvo como origen un error de juventud y falta de madurez propia de su edad, ya que tal manifestación no justifica la conducta pues es de todos sabido que la presentación de copias de un título y una cédula profesionales falsos es una falta que debe sancionarse, así como tampoco le exime de responsabilidad pues este “error de juventud” lo mantuvo varios años después cuando ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese tenor, las manifestaciones señaladas no pueden ser eximentes de responsabilidad ni justificación

para realizar conductas irregulares como la que se imputa a ***** , pues cuando se ostentó inicialmente como licenciado en Derecho sin serlo realmente, fue para ocupar cargos como el de actuario de donde se supone que tiene conocimiento legal suficiente para saber que la conducta que realizó era ilegal.

En ese orden de ideas, debe concluirse que desde su ingreso a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ***** se ostentó como licenciado en Derecho, sabiendo que no contaba con los estudios profesionales y, mucho menos, con la documentación oficial indispensable para ejercer como tal, lo que de suyo resulta violatorio de lo dispuesto en las fracciones VIII y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y VIII del 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo que se ordena en el artículo 9° último párrafo de esta última legislación, ya que ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta para lo cual es indispensable ser licenciado en Derecho, lo anterior relacionado, además, con los diversos 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y segundo transitorio del

decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento.

Así las cosas, su conducta inequívocamente es contraria a la obligación que tenía como servidor público ya que ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta sin cumplir los requisitos expresamente establecidos en la ley para tal efecto, ya que no contaba con título ni cédula profesionales y las que presentó resultaron apócrifas, sin que exista causa alguna que lo releve de la responsabilidad condigna.

QUINTO. En virtud de que se acreditó que ***** es responsable de diversas faltas administrativas, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer.

Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el diverso 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:

“Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”

Los artículos 13, fracciones I a V, tercer y cuarto párrafos; 14 y 15, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la letra dicen:

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

- I. Amonestación privada o pública;***
- II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de un año;***
- III. Destitución del puesto;***
- IV. Sanción económica, e***
- V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.***

...Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

...En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXII del artículo 8 de la Ley...

“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor; entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.”

“Artículo 15. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados...”

En esos términos, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, con base en las fracciones I a VI del transcrito artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I. Por lo que hace al primero de los aspectos referidos, es pertinente destacar que la conducta de ***** es contraria a las obligaciones señaladas en el artículo 8, fracciones VIII y XXIV, en relación con lo dispuesto en los artículos 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2, 25, fracciones II y III, y 29 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y segundo transitorio del decreto de dos de enero de mil novecientos setenta y cuatro mediante el que se reformó dicho ordenamiento, así como en la fracción VIII del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En el caso, se estima que las consecuencias de su conducta provocan que su actuar se considere grave, ya

que se condujo con falsedad ante este Alto Tribunal para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta para el cual no contaba con el requisito legal consistente en ser licenciado en Derecho y presentó documentación apócrifa para reunir ese requisito engañando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, sobre este aspecto, también cabe decir que su conducta puede dar lugar a una probable falsificación de documentos, de ahí que, con lo anterior, se haya conducido con elevada falta de probidad y honradez, máxime que no sólo se ostentó como licenciado en Derecho sin serlo sino que, además, cotidianamente mantuvo su conducta al continuar ostentándose con dicho carácter.

Al respecto, cabe agregar que el servicio público de administración de justicia descansa en la probidad y honradez de los individuos que encarnan los órganos del Poder Judicial de la Federación y principalmente en la de los servidores públicos que en términos de lo previsto en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ocupan un puesto de las categorías de la carrera judicial.

En el caso concreto, el servidor público responsable ocupó el de Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro lo

que conlleva el ejercicio de elevadas atribuciones de apoyo a los titulares del órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en el orden jurídico nacional, por lo que el hecho de aceptar dicho cargo y desempeñarlo a pesar de no contar con el requisito legal consistente en gozar de título de licenciado en Derecho constituye una conducta de máxima gravedad, pues los gobernados que ocupen esos puestos deben ser ejemplares en el acatamiento del marco jurídico, más aún cuando se presentaron documentos falsos para acreditar una situación jurídica.

Por otra parte, aun cuando ninguna de las faltas plenamente acreditadas están expresamente catalogadas como graves, ello no obsta para reconocer que la conducta generadora de tales faltas, una vez valorada, tiene una elevada gravedad, por lo que debe sancionarse de manera ejemplar con el fin de evitar prácticas de esta naturaleza; además, el hecho de que se haya conducido en la forma descrita hace que resulte inconveniente que vuelva a ocupar un cargo público en un plazo considerable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

***“MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE
DISTRITO. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA***

FEDERAL PUEDE DESTITUIRLOS POR CAUSAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTAS DE LAS PREVISTAS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación de lo dispuesto en los artículos 136 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal puede destituir a un Magistrado de Circuito o a un Juez de Distrito por una causa de responsabilidad administrativa distinta de las mencionadas en el párrafo segundo del citado artículo 136, como lo es la infracción al artículo 47, fracciones V y XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ello es así, porque en el primer párrafo del mencionado artículo 136 se establece claramente que las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación deben ser valoradas y, en su caso, sancionadas, de conformidad con los criterios contenidos, entre otros, en el artículo 54 de la ley últimamente citada, el cual

señala como uno de los elementos que deben considerarse para la imposición de una sanción administrativa, la gravedad de la responsabilidad en que se incurre, por lo que el juzgador, al aplicar este precepto, necesariamente tendrá que determinar si la falta cometida por el funcionario denunciado fue o no grave, de ahí que resulte inconcuso que las faltas administrativas no mencionadas en el segundo párrafo del propio artículo 136, pueden ser consideradas graves, menos graves o leves, y sólo respecto de ellas el Consejo de la Judicatura Federal deberá hacer la mencionada ponderación, pudiendo destituir al servidor público que haya cometido una falta grave. Esto es, el sistema establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la destitución de los Jueces de Distrito y los Magistrados de Circuito, consiste en que, en el caso de que se acredite la comisión de alguna de las faltas administrativas mencionadas en el segundo párrafo del artículo 136 de la ley orgánica en cita, el referido consejo, sin realizar la ponderación de los elementos previstos en el artículo 54 de la Ley

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberá decretar la destitución del funcionario denunciado, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 137 de la ley orgánica en mención y en el supuesto de que la falta que resulte probada, no se encuentre señalada en el segundo párrafo del artículo 136 de la referida ley orgánica, el aludido órgano de vigilancia deberá valorar dichos elementos, particularmente el relativo a la gravedad de la infracción, y de concluir que la falta cometida fue grave, deberá destituir al servidor público denunciado.”
(Tesis P. CLXXXV/2000, Pleno, Novena Época, tomo XII, diciembre de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 125).

II. Por lo que atañe a las circunstancias socioeconómicas de ***** de las constancias de autos se presume que son las propias de un Secretario de Estudio y Cuenta; sin embargo, dada la gravedad de las faltas cometidas e incluso la magnitud del beneficio derivado de las mismas no constituyen un elemento primordial para disminuir o aumentar la sanción que se le deba imponer al referido servidor público, así como

tampoco tienen injerencia para calificar la gravedad de la falta.

III. En lo atinente al tercer elemento, es menester señalar que dicho servidor público tenía la categoría de Secretario de Estudio y Cuenta, por lo que su obligación de conducirse conforme a la ley era mayor; en relación con sus antecedentes, de su expediente personal que se lleva en la Dirección General de Personal, se advierte que reporta una antigüedad en el servicio como Secretario de Estudio y Cuenta de tres años y diez meses, esto es, del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve al treinta de septiembre de dos mil tres, según diversos nombramientos expedidos por la entonces Dirección General de Desarrollo Humano, los cuales obran en el referido expediente personal del servidor público y que en todo ese tiempo, ocupó el referido cargo sin contar con los requisitos legales correspondientes.

IV. Por lo que se refiere al cuarto aspecto, relativo a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, deberá atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra parte, a las

circunstancias que rodearon la comisión de la falta así como los medios empleados para ejecutarla.

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de los servidores públicos de abstenerse de cualquier acto cuando esté legalmente impedido para ello, primordialmente se refiere a la honradez que debe caracterizar a todo servidor público, quien debe mostrar una conducta intachable y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.

En el caso, ***** faltó a su obligación de abstenerse de ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta ya que estaba legalmente impedido para ello pues no cumplía con los requisitos legales establecidos en la Ley, lo que trajo como consecuencia, entre otras, un incremento patrimonial indebido en su persona al ocupar un puesto mediante el engaño y la falta de honradez por presentar, además, documentación apócrifa para poder desempeñar el cargo, de ahí que no se ciñó al marco legal aplicable, de tal manera que resulta importante evitar la afectación al bien jurídico que salvaguarda el cumplimiento de dicha obligación.

Asimismo, en cuanto a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta así como los medios empleados para ejecutarla, debe precisarse que de autos se advierte que el mencionado servidor público se ostentó continuamente como licenciado en derecho y firmó con esa categoría, a sabiendas de que no contaba con los estudios de licenciatura correspondientes y aún más, pretendió demostrar ese grado académico presentando documentos falsos como son el título y la cédula respectivas; asimismo, recibió tres nombramientos para ocupar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta omitiendo señalar a este Alto Tribunal que estaba legalmente impedido para desempeñarse en ese puesto; con lo anterior, debe precisarse que ***** obtuvo, además, un beneficio económico indebido.

Aún más, de su expediente personal se desprende que el servidor público ocupó dentro del Poder Judicial de la Federación otros cargos para los cuales se requería la licenciatura en Derecho, como son el de Secretario de Juzgado y el de Secretario de Tribunal, lo que también demuestra que desde el ingreso a este Alto Tribunal ya tenía pleno conocimiento de su falta.

V. En lo concerniente al quinto punto, se hace hincapié en que del expediente personal de ***** se advierte que **no ha sido sancionado con motivo de alguna falta administrativa**, de ahí que no se actualice el supuesto de la reincidencia, aun cuando es cierto que se trató de una conducta continua, es decir, una conducta que desplegó desde que ocupó un cargo para el cual necesitaba cumplir con el requisito de ser licenciado en derecho y que continuó realizando incluso al ingresar a este Alto Tribunal y hasta que se retiró de él.

VI. Finalmente, por lo que hace al punto sexto de la disposición en comento, es preciso puntualizar que existe constancia en el sentido de que, a consecuencia de la presente falta, ***** obtuvo un beneficio económico indebido de este Alto Tribunal.

Sobre este aspecto, es importante señalar que ***** se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta donde obtuvo percepciones económicas inherentes a ese puesto sin tener el título profesional necesario para ocuparlo, de lo que se desprende que al recibir un salario por un cargo que legalmente no podía ocupar, obtuvo remuneraciones a las cuales no tenía derecho; de ahí que el salario que recibía cuando se desempeñaba en la

ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano resulta una percepción económica que reditúa en un incremento patrimonial en su persona que da lugar a un beneficio económico indebido porque no obstante que los laboró, los mismos no le correspondían al estar impedido legalmente para ocupar el referido cargo.

Aunado a lo anterior, la remuneración en comento se realizó bajo el engaño del servidor público, de ahí que la responsabilidad de ello resulte tanto por haber presentado documentación apócrifa para poder desempeñar el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en el cual se requería la acreditación de la licenciatura en Derecho, como por el hecho de no actuar con profesionalismo durante el desempeño del cargo al saber que no contaba con el título respectivo.

Así, con la presentación de esos documentos falsos, tanto del título como de la cédula profesional, ***** obtuvo el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta, tratando de cumplir con el requisito legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, a sabiendas de que no contaba con la licenciatura requerida, ocupó un cargo y recibió el pago correspondiente sin estar legalmente habilitado para ello, de ahí que con la referida

actuación, se insiste, obtuvo en su patrimonio un beneficio económico que no le correspondía.

En ese tenor, cuando no se cumplen los requisitos exigidos legalmente para ocupar un cargo, aun cuando se hubiera desempeñado el mismo y aparentemente se hubiera cumplido con las funciones respectivas, lo cierto es que ello no permite desconocer que el servidor público no tenía derecho a las remuneraciones respectivas.

De tal suerte, para la imposición de la sanción condigna, habrá de tomarse en cuenta que las faltas en que incurrió ***** aun cuando legalmente no están clasificadas como graves, evaluadas en su conjunto y por la naturaleza del cargo que se ocupó, sí revelan una elevada gravedad, por lo que resulta conveniente que no ocupe cargos en el servicio público durante un tiempo considerable.

Por ende, para estar en posibilidad de establecer las sanciones correspondientes a *****, debe acudirse a lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Al respecto, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señalan esencialmente que la inhabilitación será de uno hasta diez años si el monto del beneficio económico, lucro, daño o perjuicio no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal y, si excede, la inhabilitación será de diez a veinte años.

De igual manera, conforme al artículo 15 de la ley de responsabilidades señalada, deben imponerse sanciones económicas cuando el incumplimiento de las obligaciones precisadas en el artículo 8° de esa ley, produzcan un beneficio económico o lucro, o se cause un daño o perjuicio, sanciones que podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucros, o de los daños o perjuicios causados, sin que en ningún caso la sanción económica impuesta deba ser menor o igual al monto de esos beneficios o daños.

Para el caso de *****, existe en autos la constancia sobre información histórica que la entonces Directora General de Desarrollo Humano remitió a la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal y en la cual se precisa que durante el tiempo en el que

aquél ocupó el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta obtuvo como beneficio económico que no le correspondía, la cantidad de *****.

De la referida cantidad, se desprende que excede de doscientas veces el salario mínimo general vigente mensual para el Distrito Federal, el cual a la fecha de esta determinación según el Diario Oficial de la Federación de veintidós de diciembre de dos mil cuatro, es de *****, que multiplicado por treinta días y por doscientos veces, da como resultado *****, de ahí que el referido beneficio que obtuvo sea mayor a doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal y, por tanto, la inhabilitación del servidor público deberá individualizarse entre diez y veinte años.

En ese tenor, atendiendo a que si bien ***** obtuvo un beneficio económico superior a doscientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y que por ello la inhabilitación deberá individualizarse entre diez y veinte años, debe tomarse en cuenta que su conducta afecta la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que como Tribunal Constitucional debe contar con abogados destacados, honorables y profesionales, que asuman plenamente las consecuencias de sus actos y que,

por ese motivo, se abstengan de ejercer algunos que puedan perjudicar no sólo a su persona sino también a este Alto Tribunal, aunado a que por la función jurisdiccional que desarrollan no sólo hacen respetar la Ley sino que ellos deben ser cuidadosos de no infringirla, situación que en el caso no ocurrió.

Por los motivos reseñados, se estima que la sanción de inhabilitación debe ser ejemplar para evitar, se insiste, la reiteración en estos actos de los servidores públicos de este Alto Tribunal, quienes tienen aún mayor obligación de observar y conducirse dentro del marco de la ley.

En ese contexto, debe inhabilitarse temporalmente a ***** **por el término de veinte años** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, dadas las características peculiares de la conducta y del sujeto que la realizó.

Además, respecto a la sanción económica debe tomarse en cuenta que con su proceder el referido servidor público obtuvo un beneficio económico indebido y que, por ese motivo, la sanción podrá imponerse hasta tres tantos del ocasionado, según lo dispone el artículo 15 de la Ley

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por ende, en el caso se estima que si bien no existió un daño en el patrimonio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que ésta pagó los servicios que se le prestaron como Secretario de Estudio y Cuenta, sí se actualiza la hipótesis de un beneficio económico indebido en el patrimonio del ex servidor público, ya que se ostentó como licenciado en Derecho presentando documentos apócrifos para ello y de esa manera obtener un cargo para el cual estaba impedido legalmente, por lo que obtuvo un salario que no le correspondía pues, se insiste, ese salario lo percibió sin contar con los requisitos legales necesarios para estar en el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta, de ahí que es dable imponer una sanción económica, la cual se considera debe ascender a un ciento uno por ciento del beneficio ilícito obtenido, tomando en cuenta que ***** no ha sido sancionado en otras ocasiones ni se le ha llevado procedimiento administrativo alguno, además porque se estima que no buscó esencialmente un lucro con la percepción del salario por lo que se concluye que, en cantidad líquida, la sanción económica asciende a ***** , ya que el beneficio obtenido ilícitamente asciende

a ***** y el uno por ciento de esta cantidad equivale a
*****.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa al ex servidor público se le realizó embargo precautorio en la cuenta de seguro de separación individualizada ***** de Seguros *****, a nombre de *****, en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, dicho embargo se convierte en definitivo.

Ante ello, tomando en cuenta que el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, debe aplicarse el monto respectivo para cubrir la referida sanción económica, por lo que en esta resolución se adjudica el monto embargado en favor del Fisco Federal, en aplicación analógica de lo previsto en el artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación.

En tal virtud, en ejecución de esta determinación y en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañando copia certificada de esta resolución, deberá requerir a la referida Aseguradora la transferencia de los fondos antes mencionados a la Tesorería de la Federación para que se les dé la aplicación que legalmente corresponda.

Por otra parte, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal deberá solicitar a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria hacer efectiva, por el monto restante, la sanción impuesta mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales que llevan por rubro, texto y datos de identificación:

“MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal

de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados

tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código.” (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Junio de 2003, Tesis: 2a./J. 50/2003, Página: 252).

“MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y

XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas

autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden

cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación.” (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Junio de 2003, Tesis: 2a./J. 49/2003, Página: 226).

Estas tesis jurisprudenciales resultan aplicables en el caso de las sanciones económicas impuestas en un procedimiento de responsabilidad administrativa, dado que se trata de ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, por lo que encuadran en el concepto de aprovechamientos previsto en el artículo 3° del Código Fiscal de la Federación.

En mérito de lo expuesto, en uso de las facultades que me confieren los artículos 14, fracción XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tomando en consideración los elementos a que hace referencia el antes invocado artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se impone a *********, la sanción consistente en **inhabilitación temporal por el término de veinte años** para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y, además, como **sanción**

económica, el pago de *****, lo que deberá comunicarse tanto a la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría como a la Dirección General de la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realicen los trámites necesarios para la ejecución de las referidas sanciones.

Además, adquiere el carácter de embargo definitivo el trabado por la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría respecto de la cuenta de seguro de separación individualizada ***** de Seguros ***** , a nombre de ***** , por el monto de ***** , el cual en términos de lo previsto en los artículos 156 bis y 161 del Código Fiscal de la Federación aplicable por analogía, se adjudica a favor del Fisco Federal.

Por último, remítase copia de la presente resolución a la Dirección General de Personal, a efecto de que sea agregada al expediente personal de ***** ; así como a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación a fin de que se anote lo conducente en el registro de servidores públicos sancionados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de la presente resolución, ***** incurrió en las faltas administrativas materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa previstas en las fracciones VIII y XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y VIII del 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo que se ordena en el artículo 9° último párrafo de esta última legislación.

SEGUNDO. Se sanciona a ***** con una **inhabilitación temporal por el término de veinte años**, en términos de lo previsto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERO. Se impone a ***** una **sanción económica** por la cantidad de **\$3'476,431.67 (tres millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y un pesos 67/100 moneda nacional)**, en términos de lo previsto en el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la que habrá de ejecutarse en términos de la parte final del último considerando de este fallo.

Devuélvase el expediente a la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique personalmente esta determinación al servidor público sujeto al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así, lo resolvió el señor Ministro Mariano Azuela Guitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Esta foja pertenece a la resolución relativa al procedimiento
de responsabilidad administrativa 38/2003**